

Francisco ESPINOSA MAESTRE

La primavera del Frente Popular. Los campesinos de Badajoz y el origen de la guerra civil (marzo-julio de 1936)

Barcelona, Editorial Crítica, 2007, 433 pp.

El problema agrario, argumento obligado en cualquier debate sobre el crecimiento económico español contemporáneo, se convierte en explicación desdibujada en la Segunda República si lo reducimos, por ejemplo, al recuento de hectáreas expropiadas antes y después de 1936, al número de asentamientos, al boicot parlamentario de la derecha o a la retórica de Largo Caballero. Esta afirmación se tildaría de injusta o provocativa después del libro de Malefakis, referencia de tantas publicaciones, si bien más de una vez ha predominado más el parafrasear una obra, de la que van a cumplirse cuarenta años, que la propia investigación. No es el momento de enjuiciar el libro del historiador norteamericano, sino tan sólo de llamar la atención de que el periodo en el que la propiedad de la tierra fue realmente afectada, durante marzo-julio de 1936, no cuenta más que con unas pocas páginas finales. Si se tiene en cuenta que casi la mitad de campesinos asentados en el Frente Popular antes de la guerra eran de la provincia de Badajoz, tendremos justificada la importancia del libro que reseñamos, fruto de la tesis doctoral dirigida por Antonio Miguel Bernal.

Francisco Espinosa se plantea mostrar la singularidad de la experiencia republicana en Extremadura en aquel fugaz y preciso momento histórico con el objetivo de exponer “una historia política de la reforma agraria en Badajoz durante los meses del Frente Popular”. Fuentes desconocidas hasta ahora como la Auditoria de Guerra de la II División Orgánica (actual Archivo del Tribunal militar Territorial Segundo), archivos municipales, aparte de la consulta de los archivos del IRA o del AHN (sección guerra civil de Salamanca), dan consistencia a una obra documentada con 700 notas a pie de página, varios anexos y algunas imágenes de un fotógrafo portugués sobre la matanza de campesinos de Llerena que testimonian esa otra cara de la reforma, tan olvidada como brutal, de la represión. Alguien como el autor de *La columna de la muerte* o *La justicia de Queipo* era la persona indicada para este cometido.

El autor cita el comentario de Tuñón de Lara de que el análisis de Malefakis “dominaba la cúspide pero no los niveles de base ni los intermedios” para presentar otra historia de la reforma que deja hablar a sus protagonistas, que no son en este caso los parlamentarios, sino los que aspiraban a tener una parcela que labrar para escapar de la miseria o del paro. Acostumbrados a diversos indicadores sobre los niveles de vida viene bien corregir la distancia que impone lo cuantitativo con el relato de “las colas del céntimo”, del trabajo infantil, y, sobre todo, del hambre (en estrecha correlación con los bajos niveles de vida como acaba de mostrar O’Grada en su reciente libro *Famine*). Son estas carencias básicas, como el desempleo forzoso o la malnutrición endémica, las que estaban presentes en tantas acciones colectivas y que justificaban la necesidad de una acción pública mediante la reforma agraria.

Estos testimonios recorren el primer capítulo dedicado a la exposición de la reforma antes de febrero del 36. Pese a ser una reforma de cortos vuelos, con terratenientes en el Consejo del IRA, se marca bien el contraste entre primer y segundo bienio, se contextualiza adecuadamente la huelga campesina de junio de 1934, fruto de algo más que de la radicalización de Largo Caballero, y quedan patentes las contradicciones de Giménez Fernández, diputado por Badajoz, sometido a las presiones del “espíritu cristiano” y a las de quienes aspiraban a apuntillar el “marxismo extremeño”.

La gran invasión de fincas del 25 de marzo de 1936 constituye el eje central del segundo capítulo, “El Frente Popular, una experiencia abortada”. Posiblemente sea el acontecimiento

más singular de la reforma agraria republicana: varios miles de yunteros hicieron realidad los decretos de 3 de marzo ocupando cerca de 1.500 fincas; a fines de ese mes ascendían a unos 41.500 y la superficie afectada era algo más de 100.000 has. El IRA legalizó las ocupaciones y corrigió los defectos técnicos de la ocupación. El fotógrafo americano David Seymour (y no R. Capa como se ha dicho y argumenta con detalle Espinosa) dio cuenta de este episodio de movilización campesina que sirve de portada al libro. Uno de los testigos creyó que tenía “tanta importancia que sobrepasa a las guerras civiles del siglo pasado, a la caída de la monarquía, a cuanto ha sucedido en la península desde la Guerra de la Independencia”.

Esta opinión no exenta de épica —que recuerda sucesos de tres siglos atrás protagonizados por los *diggers* de Winstanley— sirve para enriquecer el *repertorio de acción colectiva* en un periodo que acostumbra a ser dominado por el “enfrentamiento fratricida”, prelude de la guerra civil. Frente a los sucesos de Castilblanco, a los que se refiere el autor en páginas anteriores, llama la atención la ausencia de incidentes reseñables en una acción masiva tan proclive para ello, algo que debe ponerse en el haber de la FNNT y de un gobierno que en ese caso no repitió el error de Casas Viejas, al procurar la intervención de los ingenieros en vez de la de guardias civiles. No hay necesidad de idealizar una reforma y ocultar los problemas financieros a los que tuvieron que enfrentarse diversas comunidades de campesinos u otros desajustes, como la mayor o menor implicación de los ingenieros, pero, sin necesidad de edulcorar el proceso reformista, no se trataba de problemas irresolubles, al contrario. El conflicto principal no iba a estar en la mayor o menos flexibilidad del IRA sino en “la escalada fascista” que no fue respuesta a la ocupación de fincas, sino que, como argumenta Espinosa, estaba en marcha tras las elecciones de febrero.

“El 18 de julio y los caminos de la reforma agraria” es el título del tercer capítulo. Ahora sí que la violencia hizo su aparición sin velo alguno. Primero, los 224 asesinatos, las coacciones e incautaciones por parte de las autoridades locales republicanas. Hubo varios miles de derechistas detenidos a los que no mataron pero sí hicieron pagar hasta las peonadas del primer bienio; es decir, no hubo algo parecido a un exterminio planificado desde el poder que es a lo que se asemeja “la gran purga”, llevada a cabo por los que se habían sublevado contra la República: las cerca de siete mil víctimas en la zona occidental de la provincia —cantidad mínima de la que hay que partir— de las que en torno al 60% eran campesinos. El autor cruza la información de los expedientes de Reforma Agraria con la que proporciona el Registro Civil para ir dando cuenta de cómo fueron “desapareciendo” jornaleros y yunteros. La descripción de la represión se completa, en la línea expuesta hace años por Barciela, con la del “gran saqueo”, primero del ganado y otro capital de las fincas del IRA que no fueron administradas por los servicios provinciales; después, el grano, el vino, las gallinas... pasaron a manos de Falange y militares que participaron en el botín.

El capítulo da cuenta también de la contrarrevolución agraria y de la implantación del Nuevo Orden: volvían los “señoritos rumbosos, flamencos, sencillos” con un Generalísimo preocupado de que no faltara “pan y calor en todos los hogares”. Después de una breve exposición sobre la cuestión agraria en la zona oriental de la provincia controlada por la República se pasa a unas conclusiones de índole más general sobre la parsimonia de la reforma, la violencia y el problema de una errónea política de Orden Público que no supo acabar con la militarización judicial de los conflictos sociales.

La historia de la reforma agraria es algo más que la historia del reparto: es “land reform” pero también “agrarian reform”. Si únicamente se considera la tierra como un factor de producción, la explicación resulta parcial. El relato de historia política y social de *La primavera del Frente Popular* marca los límites de esta simplificación. Es cierto que no hay reforma viable que suponga a la larga la disminución del producto bruto agrario. Antes de que lo dijieran Bermu-

dez Cañete o Manuel de Torres ya se quejaron los mismos yunteros cuando tardaban en llegar los créditos del IRA para sostener las tierras ocupadas o cuando solicitaban moratorias de pago. Era sin duda una reforma técnica y social a la vez que obliga a mirar más allá de “la racionalidad económica” del latifundio para observar también el resquebrajamiento del poder político tradicional. En el corto plazo hacía desaparecer el acompañante habitual del invierno en las zonas de latifundismo, el fantasma real del hambre hasta entonces conjurado con la caridad de los alojamientos; a medio y largo plazo, la mejora en los niveles de vida aparecía como el objetivo realizable que al fracasar la reforma prolongó durante décadas la miseria humana y social asociada a la desigual distribución de la propiedad y a la falta de libertad.

Estamos ante un libro, bien escrito por cierto, que ha buscado captar la complejidad de la reforma agraria desdibujada a veces en unas cuantas cifras de superficie expropiada y obreros asentados. Mérito del autor es haber corregido el vacío historiográfico casi absoluto de muchos trabajos dedicados a los años republicanos, que —en consonancia con la historiografía franquista que intentó borrarlos— no prestaron atención alguna a los cinco meses posteriores a las elecciones de febrero por considerarlos una especie de tierra de nadie que conducía a la “inevitable guerra fratricida”. Igualmente conviene destacar la estrecha relación entre la reforma agraria y la represión franquista o el extendido fenómeno de las incautaciones salvajes de tierras, viviendas, animales, productos agrícolas y objetos de todo tipo a medida que los pueblos eran tomados por *la columna de la muerte*. Quizá la compleja perspectiva de la reforma explique la brevedad de algún apartado para el que, por otra parte, no se dispone de fuentes precisas como indica el autor al constatar ese otro saqueo que ha sufrido la documentación de Falange y otras instituciones donde se ha sustentado el olvido de aquellos años.

En la década de 1930 el mejor tiempo de las reformas había pasado ya; me refiero a la posguerra del primer conflicto mundial cuando tuvieron lugar las reformas distributivas en los países de centro y este de Europa y las ocupaciones de tierras en Italia. La situación internacional con Hitler en el poder desde enero de 1933 y el católico Dollfuss en Austria tras un golpe de Estado en febrero del 34 no facilitaba la realización de proyectos reformistas sino los de Mussolini, ejemplo para la derecha, como proclamó Calvo Sotelo en las Cortes del Frente Popular. Al final, esa fue la senda que acabó con la reforma, una senda que pocos podían prever en 1931 cuando se proclamó la República y con ella la necesidad de resolver el problema agrario. A pesar de todo, como finaliza el autor el libro, también los fracasos del pasado forman parte de nuestro presente.

Ricardo Robledo Hernández
Universidad de Salamanca